

merecen luego una atención especial, como p. e. la necesidad de la aprobación pontificia para los decretos generales emanados por las conferencias, la regulación de determinados casos particulares aludidos por la doctrina, la colaboración entre las conferencias y la Santa Sede. La alusión a algunos problemas concretos propios del ámbito de habla alemana cierra el trabajo de Krämer.

Y, en fin, el último de los estudios contenidos en el volumen, de Ivo Fűr, se ocupa de *Die Bischofskonferenzen in ihren gegenseitigen Beziehungen* (págs. 271-292). El artículo complementa y completa a los dos anteriores; tras el análisis de las relaciones de las conferencias con los obispos diocesanos y con la Santa Sede, se abordan ahora las de las conferencias episcopales entre sí; tanto entre dos conferencias como entre varias de ellas dentro de un mismo continente. El artículo contiene referencias concretas al primer tipo de relaciones, sus modalidades y los casos en que han tenido lugar; por lo que hace a las relaciones múltiples, ofrece el autor breves informaciones sobre los organismos que en ese campo existen, tales como el Consejo europeo de Conferencias episcopales, el CELAM, el Simposio de las Conferencias africanas y la Federación de conferencias asiáticas; en cada caso, expone el origen del organismo, su desarrollo y estructura y hace una referencia a sus Estatutos. También pone de relieve Fűr, cuya condición de secretario del Consejo de las Conferencias europeas le permite conocer muy a fondo la materia, los puntos en común y las diferencias que entre las cuatro organizaciones continentales se dan, a la vista de las dife-

rencias propias de cada continente de un lado, y del significado de tales Consejos para fomentar la unidad de la Iglesia universal de otro.

El volumen concluye con un Índice general, un Índice de cánones y documentos citados, y un Índice personal, constituyendo en su conjunto una excelente y concisa aportación al importante tema que le sirve de argumento.

ALBERTO DE LA HERA

Antonio VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los Ordinariatos militares*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra S. A., Pamplona 1992, 312 págs.

«Los capellanes castrenses se rigen por leyes especiales». Con este laconismo, que despeja hacia otros ámbitos normativos la materia que en ese momento el legislador no quiere desarrollar, termina el Código vigente, en el c. 569, su tratamiento explícito de la asistencia pastoral especializada a los militares. Es una referencia que guarda cierto paralelismo con la hecha por el Código de 1917, en su c. 451 § 3: «Respecto de los capellanes mayores o menores de los militares deben observarse las disposiciones peculiares de la Santa Sede». Sin embargo, el laconismo del Código vigente es más llamativo, porque, a diferencia del anterior, que hacía un tratamiento muy diluido de la figura del capellán en los cc. 451 § 3, 479 § 2, 529 y 698, el Código actual dedica una rúbrica específica a los capellanes, cuyo tratamiento se desarrolla en los cc. 564-572, con un criterio fundamen-

tal: «El capellán es un sacerdote a quien se encomienda establemente, al menos en parte, la atención pastoral de alguna comunidad o grupo de fieles, para que la ejerza de acuerdo al derecho universal y particular». A pesar de que esta visión del capellán, notablemente evolucionada respecto de la tendencia del Código del 17 a relacionarlo con la *cura alicuius ecclesiae* (c. 479), encaja muy bien con la actividad pastoral de los capellanes militares, renuncia el Código actual al desarrollo normativo que les es propio para remitirse a las leyes especiales por las que se rigen, cuya formulación ha experimentado un cambio de mucha entidad, tres años después de la promulgación del Código, con la Const. Apost. *Spirituali militum curae*. Esta dinámica de la política legislativa de la Santa Sede sobre las estructuras de cura pastoral castrense y su culminación, en un momento posterior al Código vigente, obedece a unas razones de fondo, que A. Viana ha estudiado en profundidad y ha expuesto en limpio discurso jurídico, siempre atento a los datos del ámbito social a cuyo servicio se ordena la cura pastoral especializada de los militares.

A partir del siglo XVI, en que se consolida el ejército permanente entre las instituciones estatales de Europa, y más intensamente aún desde el siglo XVIII, en que se extiende el servicio militar obligatorio, el fenómeno de masas por él originado ha intensificado la necesidad de una cura pastoral especializada para los militares, para sus familiares, para el personal incorporado a su servicio profesional y para los jóvenes que temporalmente se adscriben al ejército. Además, esta institución, considerada por *Gaudium et Spes* «instrumento

de seguridad y libertad de los pueblos», y reconocida por las leyes de todos los países democráticos, precisa de una atención pastoral especializada en la educación y formación sobre grandes problemas morales relacionados con el ejercicio profesional de quienes han hecho de la milicia una profesión.

Pero, a diferencia de otro tipo de capellanes contemplados en los cc. 564-572 del Código vigente, el que debe atender la cura pastoral de los militares no puede someterse siempre a un principio establecido en el c. 565: «El capellán es nombrado por el Ordinario del lugar». Tal imposibilidad dimana de que ni la movilidad propia del personal militar, ni su específica situación profesional permiten una atención pastoral localizada, como es la diseñada en el ámbito de las competencias correspondientes al Ordinario del lugar. De ahí que la cura pastoral castrense demanda la existencia de entidades institucionales superiores a cada uno de los capellanes dedicados a la asistencia espiritual propia de un destino concreto.

Esta consideración de las entidades autónomas de la cura pastoral castrense; de su naturaleza; de la incidencia en ellas de las normas canónicas universales y particulares; del carácter personal de las circunstancias que aglutinan a los componentes todos de las circunscripciones eclesiásticas castrenses; de sus estructuras y de sus diferentes oficios; de la interpretación del conjunto del sistema pastoral es el prisma específico bajo el cual A. Viana estudia la organización pastoral propia de la cura de almas que debe prestar la Iglesia a quienes se dedican a la vida militar.

I. En línea con esta consideración de entidades jurisdiccionales de carácter

pastoral que aglutinan a un número mayor o menor de prebiteros, destinados a la cura de almas específica de los militares, comienza Viana ofreciendo referencias bien significativas de su presencia inmemorial en la historia de la Iglesia. Consta por el testimonio del Papa Gelasio la existencia de estos servicios pastorales específicos para militares, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Posteriormente, el sistema feudal favoreció intensamente la existencia de un clero propio al servicio de los diferentes señores feudales y de sus tropas. Mayor entidad aún tenía el clero palatino del imperio carolingio y los capellanes reales eximidos de las jurisdicciones territoriales. Estos fenómenos sustentadores de verdaderas entidades jurisdiccionales de carácter personal y autónomo, respecto de las circunscripciones territoriales, se intensificaron aún más por la necesaria planificación pastoral, de largo alcance, que demandaron las multitudinarias migraciones implicadas en las cruzadas y en los posteriores desplazamientos de tantas comunidades orientales hacia el Occidente presionadas por la invasión de los turcos.

1. Pero, en relación con la historia de las estructuras pastorales específicas para militares, el siglo XVI constituye un hito especialmente significativo por iniciarse entonces una dedicación profesional a la milicia más acentuada, cuya atención pastoral dió origen a un doble modelo organizativo, que Viana denomina *sistema diocesano* y *sistema de dirección pontificia*. El primero, adoptado en la atención pastoral del ejército francés, es el resultado de una colaboración de todos los Ordinarios locales y de los Superiores mayores de la nación, que

presentaban a determinados ministros de su propio clero, para que fueran destinados a esos servicios pastorales especializados mediante el nombramiento hecho por la autoridad civil. Este modelo, que se desarrolla sin intervención de la Santa Sede, no sólo se aplicó en los siglos iniciales de la Edad Moderna, sino que fue adoptado también por Bélgica, desde 1833, y continúa en vigor en países de menor extensión territorial como Irlanda o Suiza

Como puede verse, aunque denomine Viana a este modelo organizativo de la cura pastoral castrense *sistema diocesano*, no puede entenderse esta expresión como si estuviéramos ante una organización meramente diocesana de los servicios pastorales a los militares. En este modelo, las diócesis se limitan a proporcionar presbíteros, que son enviados a sus respectivos destinos pastorales por una autoridad diferente de su obispo de origen, y quedan insertos en una organización de servicios pastorales diferente de sus diócesis originarias, caracterizada por aglutinar a los destinatarios de la atención pastoral especializada en razón de unas circunstancias personales comunes dimanantes de su profesión militar. En su sentido propio, el sistema diocesano de atención pastoral a los militares tiene lugar en otras hipótesis referidas también en la monografía de Viana: cuando el obispo diocesano decide nombrar un Vicario episcopal con potestad ordinaria, respecto de la cura pastoral castrense en su Diócesis, semejante a la que tiene el Vicario general por derecho universal (c. 476); cuando decide erigir una o más parroquias personales para la atención pastoral específica de los militares en su diócesis (c. 518); o si decide nombrar

uno o más capellanes militares, en instalaciones existentes en su Diócesis, porque el derecho aplicable al caso no tiene establecidas previsiones respecto de una organización pastoral específica y autónoma para atender a quienes profesan la milicia.

2. A diferencia del llamado por Viana *sistema diocesano*, también en el siglo XVI se comienza a aplicar otro, que Viana llama *sistema de dirección pontificia*, en el cual los monarcas acuden a la Santa Sede pidiendo autorizaciones y providencias para establecer unos servicios pastorales específicos para los militares, que implican la oferta de una jerarquía eclesiástica peculiar para la milicia. Este sistema, seguido en España, Austria, Cerdeña, Nápoles, Chile..., coincide con el establecido en Francia en que las Diócesis y las Congregaciones religiosas proporcionan los presbíteros que ejercerán el ministerio en favor de los militares; pero se diferencia en que la intervención del Romano Pontífice asegura la legitimidad con que reciben la misión canónica quienes desempeñan la cura de almas en favor de los militares, insertos en una estructura personal autónoma y específica respecto de las diócesis existentes en un país determinado.

Mediante Breves apostólicos reiteraba la Santa Sede, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, la concesión de un conjunto de facultades, para ser ejercidas sólo en tiempo de guerra, por las cuales los capellanes, bajo el gobierno del Capellán Mayor o del Vicario General, ejercían funciones similares a los párrocos, en favor de los militares que estuvieran fuera de sus respectivas Diócesis, de sus familias y de sus criados. Tal jurisdicción era exenta respecto

de los Ordinarios locales, salvo en relación con el matrimonio de los militares, para el cual su jurisdicción era acumulativa con el párroco local.

3. Aunque la historia nos presenta una diversidad de modelos organizativos de la cura pastoral castrense, Viana destaca la importancia que tiene, para el estudioso de la organización eclesiástica, la existencia de unas entidades institucionales de carácter autónomo, erigidas por la Santa Sede, en diversas naciones, para atender a los fieles vinculados de una u otra manera a los ejércitos. Estamos ante entidades estructuradas en razón de que la existencia ordinaria de los militares, su peculiar forma de vida, hacen necesaria la creación de unos servicios pastorales autónomos, respecto de las diócesis territoriales, porque así lo requieren las condiciones de vida de ese amplio conjunto de personas, que obligan al Derecho de la Iglesia a erigir estructuras personales de servicios pastorales en concurrencia con las estructuras territoriales, y cuya regulación jurídica debe reflejar también el legítimo interés que la autoridad civil tiene en su correcto desarrollo.

II. Concluida la exposición de los datos referentes a los siglos anteriores, se refleja, en el capítulo II, el largo desarrollo que, durante el siglo XX, ha tenido la normativa canónica, universal y particular, relativa a la organización de la cura de almas para los militares en razón del criterio personal que aglutina su peculiar forma de vida ordinaria. En cinco apartados, da razón el autor de la normativa que desemboca en la Inst. *Sollemne semper*; de las determinaciones hechas por el Concilio Vaticano II; de las normas posconciliares; de las Prela-

turas castrenses en los trabajos preparatorios del CIC de 1983 y de la Const. Ap. *Spirituali militum curae*, de 21. IV. 1986.

1. El 23 de abril de 1951, la S. C. Consistorial publicó la Inst. *Sollemne semper*, verdadera ley marco de la cura pastoral castrense, que, por primera vez, propuso los principios ordenadores de la materia con carácter de derecho universal. En ella, el Vicariato militar era configurado como una estructura dedicada a la cura pastoral de los militares, que la Santa Sede erigía «ob peculiarium rerum hominumque adiuncta», como entidad equiparable a las demás circunscripciones eclesíasticas. La potestad del Vicario castrense se definía como ordinaria, por estar vinculada a ese oficio constituido por la Santa Sede, y personal, por estar constituida en servicio de unos fieles, determinados por su personal género de vida militar. Finalmente, esta potestad ya no sería exenta, respecto de los Ordinarios locales, como venía siendo hasta entonces, sino cumulativa con la de ellos.

2. Esta estructuración más ágil de la cura pastoral castrense, impulsada por Pío XII en aplicación de criterios ordenadores de carácter personal y no territorial, desplegados también por él mismo respecto de la atención pastoral de los prófugos, emigrantes y navegantes y en el régimen peculiar de la Misión de Francia, sería confirmada más tarde por el Concilio Vaticano II. En línea con la renovación eclesiológica impulsada por este Concilio, la visión de la diócesis como *Populi Dei portio*, sin mencionar al territorio como elemento constitutivo (CD, 11), y la *sollicitudo omnium Ecclesiarum*, como actitud de todos los fieles y muy especialmente de

la Jerarquía (LG, 23), dan un nuevo marco doctrinal al tratamiento canónico de los Vicariatos castrenses en CD, 43: «Como se debe una singular solicitud a la atención espiritual de los militares, a causa de sus peculiares condiciones de vida, ha de erigirse en cada nación, en lo posible, un Vicariato Castrense. Tanto el Vicario como los capellanes han de dedicarse celosamente a esta difícil obra en armónica cooperación con los Obispos diocesanos. Por tanto, los Obispos diocesanos han de conceder al Vicario Castrense sacerdotes en número suficiente, aptos para esta difícil función, y deben favorecer a la vez iniciativas para proveer al bien espiritual de los soldados».

Analiza también Viana otros textos del Vaticano II cuyos contenidos muestran su apertura a estructuras personales de acción pastoral, inspiradas en la necesidad de servir a los fieles de distinto Rito, mediante sacerdotes o parroquias específicas de ese Rito, o mediante un Vicario Episcopal o, si fuera necesario a juicio de la Santa Sede, constituyendo una Jerarquía propia según la diversidad de los Ritos (CD, 23, 3/b). Más cercano aún al tratamiento específico de la atención pastoral a los militares es el contenido de PO, 10/b: «Donde así lo pida una razón de apostolado, se ha de facilitar no sólo una distribución más adecuada de los presbíteros, sino también las tareas pastorales peculiares que, en favor de los distintos grupos sociales, deban realizarse en una región o nación o en cualquier lugar del mundo. Para ello puede ser útil constituir algunos seminarios internacionales, peculiares diócesis o prelaturas personales y otras (instituciones) semejantes, a las cuales, del modo que

se ha de determinar para cada una y quedando siempre a salvo los derechos de los Ordinarios del lugar, puedan adscribirse o incardinarse presbíteros para el bien común de toda la Iglesia».

3. En coherencia con estas disposiciones conciliares, la Santa Sede continuó su actividad constituyendo Vicariatos Castrenses en diversos países y dando cumplimiento así a lo mandado en CD, 43. Viana da razón cumplida de cada uno de estos actos de erección, entre los cuales merece mención especial el Acuerdo Castrense entre la Santa Sede y el Estado Español, de 1979, por incluir esta significativa expresión: «El Vicariato Castrense, que es una diócesis personal, no territorial... », que por primera vez vincula expresamente la cura castrense con el modelo estructural diocesano.

4. Cuando, en 1965, comienzan los trabajos de revisión del CIC de 1917, podía pensarse que el nuevo Código tendría en cuenta los principios y determinaciones conciliares sobre la cura pastoral específica de los militares. Sin embargo, el CIC de 1983 no reguló tal régimen canónico, limitándose el c. 569 a remitir a las leyes especiales sobre los capellanes militares. De ahí el interés con que Viana estudia los trabajos preparatorios del CIC en relación con este punto.

Los primeros proyectos configuraron a los Vicariatos Castrenses como un tipo de Prelaturas personales, con el nombre específico de Prelaturas Castrenses, en coherencia con lo dispuesto en PO, 10/b. A partir de ese dato básico, analiza Viana cómo los consultores no pusieron en duda la relación existente entre las Prelaturas personales y los Vicariatos Castrenses. El punto más

debatido fue el modo de vincular las Prelaturas personales con las Iglesias particulares. Los Esquemas de 1977 y 1980 hacían tal vinculación mediante la asimilación y la equiparación *in iure* de las Prelaturas personales a las Diócesis, lo que llevó a un consultor a señalar, como diferencia, que los vicariatos castrenses no gozaban de la facultad de incardinar clérigos. La mayoría de los consultores fueron favorables a la equiparación jurídico-canónica, que no implica una identificación teológica con las Iglesias particulares.

Estudia también Viana las observaciones hechas en la sesión plenaria de la Comisión de reforma del CIC, de 20-28 de octubre de 1981. Algunas se oponían al sistema de la *aequiparatio canonica*, mientras otras entendían que el territorio es elemento esencial de la Iglesia particular; lo que no fue aceptado por la Secretaría de la Comisión codificadora, la cual insistió en que la *aequiparatio* respetaba siempre el principio de que, en las Prelaturas personales, la potestad prelaticia «*plenam nunquam esse potest*», sino sólo mixta o cumulativa con la potestad de los Obispos diocesanos. Los miembros de la Plenaria decidieron modificar el Esquema de 1980, respecto de las Prelaturas personales, y se planteó la regulación específica de los Vicariatos Castrenses, ya que, de otro modo, quedarían fuera del futuro CIC. Este encargo de la Plenaria no fue cumplido plenamente, pues los cc. relativos a las estructuras eclesíasticas castrenses no contenían una regulación específica del Vicariato castrense, sino una normativa referida a los capellanes en general con alguna alusión a los capellanes castrenses.

5. Tal opción de los codificadores implicaba el necesario tratamiento canónico de la organización pastoral específica para los militares, en un momento posterior a la promulgación del Código, que ha tenido lugar con la Const. Ap. *Spirituali militum curae*, de 21 de abril de 1986. En ella la asistencia espiritual a los militares se garantiza mediante la constitución de estructuras eclesiásticas de carácter personal, para los distintos países, que reciben el nombre de Ordinariatos castrenses. El principio general que informa su régimen jurídico es el de su asimilación o equiparación con las Diócesis: tienen su pastor propio, que enseña, santifica y gobierna a su comunidad con todos los derechos y obligaciones de los Obispos diocesanos; recibe *pro norma* la ordenación episcopal y es nombrado, instituido o confirmado por el Romano Pontífice; puede tener un presbiterio propio y un pueblo delimitado con el criterio personal de que profesen sus fieles la milicia o formen parte de una familia de militar o trabajen en establecimientos militares. Pero debe tenerse en cuenta que la jurisdicción militar es siempre cumulativa con la de los respectivos Ordinarios locales.

A. Viana entiende que este contenido básico del estatuto jurídico de los Ordinariatos militares, tal como viene establecido en la *Spirituali militum curae*, constituye la ley marco, cuyos contenidos tienen el valor de principios generales de regulación que habrán de completarse estatutariamente en cada Ordinariato, según sus peculiares circunstancias. Esta determinación posterior se realiza en los estatutos, que deben precisar el lugar de la iglesia del Ordinariato, el número de vicarios ge-

nerales y oficiales; la condición eclesiástica y militar de los sacerdotes y diáconos, y otros aspectos que contribuyen a descentralizar los contenidos normativos de los Ordinariatos. No obstante, son establecidos o sancionados los estatutos por la Santa Sede, en unos casos, siendo asumidos personalmente por el Romano Pontífice; en otros, actúa la Congregación para los Obispos, pero siempre a través de una habilitación pontificia que concede al acto sancionador alcance y valor legislativo. Por otra parte, el procedimiento sancionador que culmina con el oportuno decreto conoce y asume la participación del ente interesado (Ordinariato), que somete el proyecto estatutario a la revisión (*recognitio*) de la Santa Sede y puede hacer las necesarias observaciones antes de que el texto tenga carácter definitivo.

III. Concluida la exposición del largo itinerario históricamente seguido para la elaboración de las normas universales sobre los Ordinariatos militares, inicia el autor una consideración sistemática y muy matizada de lo referente a la composición personal del Ordinariato militar, a sus estructuras y sus oficios, para concluir realizando una interpretación sistemática del Ordinariato militar como institución canónica. A partir de este momento, no sólo son tenidas en cuenta las disposiciones de la ley marco, sino también el contenido de los estatutos sancionados para los diversos Ordinariatos.

1. El núcleo dedicado la composición personal del Ordinariato se descompone en el tratamiento de lo relativo al Ordinario militar, al presbiterio del Ordinariato y a su pueblo. En relación con las características personales y

la potestad del Ordinario, además de exponer lo referente a su nombramiento y a su condición personal, da razón también de lo dispuesto sobre situaciones de sede impedida o vacante; sobre el fundamento, características y consecuencias de la pertenencia del Ordinario militar a la Conferencia Episcopal; sobre la potestad prelatia vista históricamente y en el planteamiento moderno; sobre la potestad propia, personal y cumulativa del Ordinario militar.

2. Respecto del presbiterio, delimita perfectamente la situación jurídica del clero incardinado, respecto del clero agregado al Ordinariato y del clero religioso que está a su servicio, para pasar a estudiar luego la dependencia jerárquica respecto del Ordinario militar, del Ordinario del lugar donde se encuentra y del Ordinario de la Diócesis donde el clérigo puede mantener su incardinación.

3. Se cierra la consideración del elemento personal de los Ordinariatos con el tratamiento de lo referente al pueblo, que en cada uno de ellos queda integrado. Después de analizar los diferentes títulos que originan la pertenencia a un Ordinariato, se hace notar cómo han abandonado los textos más recientes el concepto de *súbdito*, todavía empleado por la Inst. *Sollemne semper*, para sustituirlo por el de miembro, en consonancia con la eclesiología del Vaticano II y la terminología de ella derivada para designar a quienes forman parte de una concreta Iglesia particular. De ahí deriva también la coherencia con que debe hablarse del *populus proprius* de los Ordinariatos militares, aunque tenga cada uno de los Ordinarios jurisdicción cumulativa con el Ordinario local; porque cada uno de los fieles

no está vinculado exclusivamente al pueblo de la estructura personal específica de los militares. Por ello entiende Viana que, aunque no emplee la Const. Ap. *Spirituali militum curae* la expresión *portio Populi Dei*, para referirse a los Ordinariatos militares, no se ve inconveniente en considerarlos así, porque estamos ante unas circunscripciones eclesísticas, cuya configuración refleja la completa estructura de la Iglesia en el orden de lo particularizado: pastor de orden superior, clero y pueblo fiel. Se destaca así el sentido comunitario del Ordinariato y la condición activa y responsable de su pueblo. El laicado tiene una condición teológica y canónica similar a la que es propia de los fieles de una Diócesis, cuya libertad es notoria, al disponer para el desarrollo de su vida cristiana de una oferta pastoral especializada, como es la que representa el Ordinariato, complemento de la Diócesis, y también de los servicios diocesanos en que el militar está inserto con los vínculos dimanantes de la territorialidad. De ahí la acumulación de potestades existentes en relación con su atención pastoral.

IV. La semejanza que, respecto de la constitución básica de los Ordinariatos, existe entre éstos y las Diócesis, se prolonga también en cuanto a la estructuración de los oficios y servicios juridico-pastorales, que el Ordinariato debe proporcionar a sus miembros. Como cualquier circunscripción mayor, cuenta el Ordinariato con su curia, que colabora con el Ordinario de forma estable en el gobierno espiritual de sus fieles. Dispone igualmente de sus propios consejos u organismos consultivos: el consejo presbiteral y el consejo de pastoral. El primero parece preceptivo.

El segundo, no mencionado en la Const. Ap. *Spirituali militum curae*, es recibido por los estatutos de diferentes Ordinariatos y silenciado en otros. En línea con este paralelismo organizativo de las Diócesis y de los Ordinariatos, estudia Viana la organización judicial del Ordinariato, las disposiciones relativas al seminario y a la incardinación de clérigos en el Ordinariato, para concluir analizando las normas referentes a la selección y nombramiento de los capellanes; a sus clases y condición personal y a su asimilación con los párrocos, en cuanto a los deberes, derechos y funciones de su servicio pastoral.

V. Concluida la consideración del régimen canónico de los Ordinariatos militares, dedica Viana el último capítulo de su estudio a la interpretación sistemática del mismo Ordinariato como institución específicamente diferenciada de otras figuras canónicas de delimitación y jurisdicción personal, más o menos afines con ella. No le parece al autor que sea aplicable al Ordinariato militar el modelo del c. 372 § 2, que prevé la erección de distintas Iglesias particulares en un mismo territorio por razón del rito de los fieles o por otra razón semejante; tampoco le convence la aplicación al Ordinariato militar del modelo de las Prelaturas personales, aunque no han faltado autores que se han manifestado en este sentido, antes del Vaticano II y después, sobre todo porque la misma Const. Ap. *Spirituali militum curae* se remite, en su preámbulo a PO, 10/b; también discrepa Viana de quienes han aplicado a los Ordinariatos el modelo de las diócesis peculiares, mencionadas en PO, 10/b, pues la asimilación canónica del Ordinariato con las diócesis no puede entenderse

como una verdadera identidad en su naturaleza jurídica. Entiende Viana más bien que el Ordinariato militar es una institución canónica de naturaleza peculiar, por lo cual debe insistirse en su complementariedad y necesaria coordinación con las Iglesias particulares. Es de notar que, en este último apartado, el autor, teniendo siempre presentes los datos dimanantes de la normativa universal hoy vigente y de los estatutos propios de los diferentes Ordinariatos, toma muy en consideración el sentir de los muchos autores que han opinado sobre la cuestión planteada, para mantener con vigor la calificación canónica más fundada.

VI. Por cuanto llevamos expuesto, fácilmente puede deducirse que estamos ante el estudio más completo y autorizado sobre los Ordinariatos militares, cuyo planteamiento y desarrollo reposado resultaba imprescindible, ante la viveza que ha dado a esta institución la intensa dinámica normativa que han experimentado en la segunda mitad del siglo XX, en contraste con el silencio que el Código vigente ha guardado respecto de las instituciones específicas de la cura pastoral castrense.

Profundo conocedor de los principios inspiradores de la organización eclesiástica alentada por el Vaticano II, A. Viana ha elegido una materia de estudio particularmente representativa de la importancia que, en nuestro tiempo, atribuye la Iglesia a los servicios pastorales más ágiles y específicos para tantos grupos y comunidades de fieles a los cuales es muy difícil que llegue la ordinaria cura de almas. Sobre ella, proyecta un análisis clarificador de sus más variados aspectos organizativos y muestra la coherencia con que el legislador

ha estructurado el ordenamiento de los Ordinariatos militares, manteniendo un tratamiento diferenciador respecto de otras figuras canónicas, inspiradas también en criterios de jurisdicción personal, como las Iglesias rituales, las Prelaturas personales o las Diócesis «peculiares». La conclusión es particularmente digna de ser tenida en cuenta, porque la novedad de estas figuras de cura pastoral,

impulsadas por el Vaticano II e incorporadas al Código vigente, podría inducir a un tratamiento indiferenciado de realidades jurídicas diversas, dentro del común carácter personal de los criterios con que son aglutinados sus fieles en ellas y de la potestad de gobierno que sobre ellas se ejerce.

ELOY TEJERO